LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

TEXTO ORIGINAL.

Ley publicada en el Periódico Oficial, Alcance del 6 de octubre de 2026.

GOBIERNO DELESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

LIC. JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:

QUE LA LXVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

D E C R E T O NÚM. 728 – LXVI

POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le confiere el artículo 56, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, **D E C R E T A:**

A N T E C E D E N T E S

1. En la Sesión Ordinaria Número 209 del Congreso del Estado, llevada a cabo el 14 de septiembre de 2026, la Presidencia de la Directiva informó al Pleno que se recibió el GEH/051/2026 presentada por el Lic. Julio Menchaca Salazar, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo por medio del cual, en ejercicio de su facultad concedida por la Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentó la “Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo; la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo; y se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, en materia de fortalecimiento a la transparencia y a los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales”.

2. El 18 de septiembre del año en curso, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, la iniciativa señalada fue turnada a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, para su análisis y resolutivo, en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y el numeral 24 de su Reglamento.

3. La iniciativa de mérito fue registrada en el libro de gobierno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales con el número **1130/LXVI**.

Por lo que en mérito de lo expuesto; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Que, en términos del artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y el artículo 2 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, al Congreso Local, le corresponde Legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado. Por su parte, los artículos 24 y 27 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, autorizan a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para conocer y dictaminar sobre las iniciativas de creación, reformas o adiciones de las leyes locales;

En ese sentido, la Comisión actuante **es competente para conocer y emitir el resolutivo del presente asunto**.

SEGUNDO. Que, el proceso legislativo que regula en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, refiere que toda iniciativa de Ley o de Decreto deberá pasar a la comisión o comisiones respectivas, y que el trámite de la misma se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo;

En tal virtud, conforme a lo dispuesto por los artículos 85 y 91 de dicha Ley Orgánica, esta Comisión dictaminadora ha llevado a cabo las gestiones y estudios necesarios para resolver la propuesta normativa turnada, conforme a la legislación aplicable y bajo los principios que rigen el derecho parlamentario.

TERCERO. Que, respecto del análisis de fondo, es necesario resaltar que el objetivo principal de la iniciativa que se resuelve, es el armonizar el marco jurídico local de conformidad con los ajustes constitucionales y legales del orden federal, estableciendo mediante la expedición de una nueva legislación estatal, las bases, principios, procedimientos y mecanismos para garantizar los derechos de acceso a la información y a la protección de datos personales, determinando las competencias de las autoridades garantes locales, entre las que se encuentra la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; esto último mediante la adecuación de la norma que regula las atribuciones de la administración pública centralizada.

CUARTO. Que, en el ámbito internacional, diversos son los instrumentos en los que se han plasmado los esfuerzos por dotar de contenido al derecho de acceso a la información. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, se dispuso en su artículo 19 que:

> *ARTÍCULO 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.*

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980 y vigente en el país desde el 23 de junio de 1981, en el punto dos del artículo 19, señala que:

> *2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.*

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, con las restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley en la materia.

Por otro lado, a nivel regional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13.1, reconoce el derecho que asiste a toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Esta disposición ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que comprende el derecho de toda persona a solicitar y recibir la información que obra en poder del Estado, imponiendo a las autoridades el deber de garantizar su acceso, salvo las restricciones excepcionales previstas por el propio orden.

QUINTO. Qué, en el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 6 que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Asimismo, en el apartado A de dicho artículo constitucional, se dispone que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben considerar, entre otros principios, que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales debe ser protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, por lo que los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención.

En ese mismo sentido, el diverso artículo 16 constitucional contempla en su párrafo segundo que, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

SEXTO. Que, el acceso a la información encuentra una particular distinción de otros derechos intangibles, derivado de que cuenta con un doble carácter a saber, en primer lugar como un derecho en sí mismo y, en segundo plano, como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 54/2008[1], estableció que, además de un valor propio, la información tiene uno instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho.

Particularmente del criterio jurisprudencial delimita la importancia de ese derecho al referir que "*...Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia de la información pública gubernamental y, a la vez, se vincula con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*"

SÉPTIMO. Que, el avance constitucional de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales obedece a la evolución social, cultural y democrática del pueblo de México, que deriva en la transformación de las instituciones encargadas de garantizar su ejercicio efectivo.

En ese contexto, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024, el Reformador aprobó diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, con el propósito de redefinir la estructura institucional del Estado mexicano en importantes sectores, redistribuyendo competencias entre los distintos órdenes y

[1] Tesis. P./J. 54/2008, Registro digital: 169574, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXVII, junio de 2008, página 743.

órganos de gobierno, y adecuando el funcionamiento de la administración pública a un nuevo modelo de coordinación institucional.

En lo que respecta al derecho de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales, la reforma constitucional redefinió el modelo institucional de garantía al extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por consecuencia los Organismos Garantes en la materia de los Estados de la Federación, y establecer una nueva distribución competencial entre autoridades federales y locales, preservando en todo momento el reconocimiento constitucional de ambos derechos humanos y la obligación del Estado mexicano de garantizar su tutela efectiva, de conformidad con los principios previstos en los artículos 1°, 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

OCTAVO. Que, como consecuencia del proceso de transformación constitucional iniciado con la reforma publicada el 20 de diciembre de 2024, el Congreso de la Unión expidió un nuevo marco jurídico general destinado a desarrollar las disposiciones constitucionales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, con el propósito de sentar las bases del nuevo diseño institucional nacional y establecer las reglas de coordinación entre las autoridades garantes de estos derechos en los distintos órdenes de gobierno, que permitan actuar al Estado mexicano de forma articulada a través del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

Así, con fecha 20 de marzo de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ambas leyes secundarias, constituyen el desarrollo legislativo del nuevo marco constitucional y establecen las bases de un sistema nacional que, sin desconocer las particularidades de cada entidad federativa, busca garantizar condiciones homogéneas para el ejercicio de derechos que, por su naturaleza, corresponden a todas las personas con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren. En este sentido, los ordenamientos de carácter general establecen un parámetro común que debe ser observado por las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, sin perjuicio de las competencias que la propia Constitución reconoce a las entidades federativas.

NOVENO. Que, en concordancia con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la expedición de las Leyes Generales en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, el estado de Hidalgo tiene la obligación de adecuar su marco constitucional y legal al nuevo modelo nacional para garantizar estos derechos, atendiendo las competencias, principios y estándares de protección reconocidos tanto en el orden federal.

En atención a ello, se procedió a realizar una reforma al marco constitucional del Estado de Hidalgo, mediante el decreto NÚMERO 580–LXVI, para adecuar el diseño institucional local a las nuevas disposiciones generales en materia de simplificación orgánica, determinando la transformación del modelo mediante el cual se garantizaban los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, estableciendo de esta forma las bases para la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, así como para la redistribución de las atribuciones que anteriormente correspondían a dicho organismo entre los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los órganos internos de control o equivalentes de los órganos constitucionalmente autónomos

En consecuencia, corresponde al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo expedir un nuevo marco jurídico que, además de armonizarse con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las Leyes Generales de la materia, responda a las particularidades institucionales, administrativas y sociales de la entidad, estableciendo con claridad las competencias de las Autoridades Garantes locales,

los procedimientos para el ejercicio de los derechos, los mecanismos de tutela y las obligaciones de los sujetos obligados en el Estado.

DÉCIMO. Que con base en los argumentos expuestos, las y los integrantes de la Comisión actuante **hemos determinado la viabilidad y procedencia de la iniciativa en estudio**, al coincidir con la parte promovente respecto de que la expedición de una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo constituye una medida necesaria para materializar la reforma constitucional en Hidalgo, dotar de certeza jurídica al nuevo modelo institucional en la materia, permitir la consolidación del Subsistema de Transparencia en el Estado como ente articulador de la política nacional y garantizar que la transformación orgánica del Estado se traduzca en una tutela efectiva, accesible y continua de los derechos humanos de las personas hidalguenses, centro de todo esfuerzo institucional; sin que se soslaye la necesidad de adecuar las atribuciones que debe ostentar la Secretaría de Contraloría conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, de manera que le permitan cumplir por sí misma, o mediante sus órganos adscritos, el papel que le corresponde en el nuevo paradigma de la protección a los referidos derechos.

De esta manera, con la aprobación de la presente pieza legislativa, se permite abonar a la consecución de los principios de la simplificación orgánica que constituyó el objeto de la reforma constitucional a nivel federal del 20 de diciembre de 2024, ello mediante el establecimiento en el respectivo régimen transitorio, de la formal extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, permitiendo dar inicio con los procedimientos y trámites administrativos y financieros que resulten necesarios para tal fin.

POR TODO LO EXPUESTO:

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE DECRETO NÚMERO 728 – LXVI:

POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se **EXPIDE** la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DEL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o Bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado de Hidalgo.

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de Sujetos obligados;

II.- Distribuir atribuciones entre la Secretaría y las Autoridades garantes, en materia de protección de datos personales en posesión de Sujetos obligados;

III.- Establecer las bases y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

IV.- Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

V.- Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos del Estado y los municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento;

VI.- Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales;

VII.- Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales, y

VIII.- Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.- Áreas: Instancias de los Sujetos obligados previstas en los respectivos reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes; que cuentan o puedan contar, dar tratamiento y ser responsables o encargadas de los datos personales;

II.- Autoridades garantes: La Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, quien conocerá también de los asuntos en materia de protección de datos personales de los municipios; la Contraloría General del Poder Judicial; los órganos internos de control o equivalentes de los organismos constitucionales y legalmente autónomos y la Contraloría Interna del Poder Legislativo en el Estado de Hidalgo;

III.- Aviso de privacidad: Documento a disposición de la Persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos;

IV.- Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;

V.- Bloqueo: Identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponda;

VI.- Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 77 de la presente Ley;

VII.- Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente;

VIII.- Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la Persona titular de los datos, mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos;

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

X.- Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para ésta. De manera enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, orientación sexual, identidad de género y expresión de género;

XI.- Derechos ARCO: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;

XII.- Disociación: Procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse a la Persona titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación de la misma;

XIII.- Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que posee;

XIV.- Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento mediante el cual los Sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de las personas titulares, así como los deberes de los responsables y las personas encargadas, previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

XV.- Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XVI.- Ley: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo;

XVII.- Ley General: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados;

XVIII.- Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a las Personas titulares el Aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio alcance;

XIX.- Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales;

XX.- Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en materia de protección de datos personales;

XXI.- Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa mas no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

a).- Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;
b).- Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, recursos e información;
c).- Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la organización, y
d).- Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad;

XXII.- Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa mas no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades:

a).- Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;
b).- Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones;
c).- Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y
d).- Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales;

XXIII.- Persona encargada: Persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización de la persona responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta de la persona responsable;

XXIV.- Persona titular: Persona física a quien corresponden los datos personales;

XXV.- Plataforma Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

XXVI.- Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el responsable y la Persona encargada, dentro o fuera del territorio mexicano;

XXVII.- Responsable: Sujetos obligados a que se refiere la fracción XXIX del presente artículo que deciden sobre el tratamiento de datos personales;

XXVIII.- Secretaría: Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo;

XXIX.- Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, constitucionales y legalmente autónomos, fideicomisos y fondos públicos, en el ámbito estatal y municipal;

XXX.- Supresión: Baja archivística de los datos personales conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en materia de archivos, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable;

XXXI.- Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta de la titular, del responsable o de la Persona encargada;

XXXII.- Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con su obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición, y

XXXIII.- Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como Fuentes de acceso público:

I.- Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar la información al público y esté abierto a la consulta general;

II.- Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;

III.- Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV.- Los medios de comunicación social, y

V.- Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables.

Para que los supuestos enumerados en el presente artículo sean considerados Fuentes de acceso público será necesario que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, derecho o tarifa. No se considerará una fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o tenga una procedencia ilícita.

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la Persona titular o, en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 16 de esta Ley.

En el tratamiento de datos personales de niñas, niños y adolescentes se deberá privilegiar el interés superior de la niñez, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 8. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General, así como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados; favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y procurando a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de protección de datos personales.

Artículo 9. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y de la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo.

TÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS Y DEBERES

CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS

Artículo 10. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.

Artículo 11. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.

Artículo 12. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.

El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el Aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en las disposiciones jurídicas aplicables y medie el consentimiento de la Persona titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 13. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos, y deberá privilegiar la protección de los intereses de la Persona titular y la expectativa razonable de privacidad.

Artículo 14. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 16 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo de la Persona titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma:

I.- Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad de la Persona titular;

II.- Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento, e

III.- Informada: Que la Persona titular tenga conocimiento del Aviso de privacidad, previo al tratamiento al que serán sometidos sus datos personales.

En la obtención del consentimiento de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que pertenezcan a grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, se estará a lo dispuesto en las reglas previstas en la legislación civil que resulte aplicable.

Artículo 15. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita.

Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad de la Persona titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología.

El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición de la Persona titular el Aviso de privacidad, ésta no manifieste su voluntad en sentido contrario. Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que las disposiciones jurídicas aplicables exijan que la voluntad de la Persona titular se manifieste expresamente.

Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito de la Persona titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

Artículo 16. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la Persona titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:

I.- Cuando una legislación aplicable así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, y en ningún caso podrán contravenirla;

II.- Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;

III.- Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente;

IV.- Para el reconocimiento o defensa de derechos de la Persona titular ante autoridad competente;

V.- Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la Persona titular y el responsable;

VI.- Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes;

VII.- Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia sanitaria;

VIII.- Cuando los datos personales figuren en Fuentes de acceso público;

IX.- Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de Disociación, o

X.- Cuando la Persona titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de las disposiciones jurídicas en la materia.

Artículo 17. El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que no se altere la veracidad de éstos.

Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son proporcionados directamente por la Persona titular y hasta que ésta no manifieste y acredite lo contrario.

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en el Aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, deberán ser suprimidos, previo Bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismos.

Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales.

Artículo 18. El responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, Bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales se incluyan los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior de la presente Ley.

En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá incluir mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como para realizar una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales.

Artículo 19. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Artículo 20. El responsable deberá informar a la Persona titular, a través del Aviso de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.

El Aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con que cuente el responsable, asimismo, deberá ponerse a disposición en su modalidad simplificada.

Para que el Aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla.

Cuando resulte imposible dar a conocer a la Persona titular el Aviso de privacidad, de manera directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 21. El Aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información:

I.- La denominación y el domicilio del responsable;

II.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son sensibles;

III.- El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;

IV.- Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento de la Persona titular;

V.- Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos ARCO;

VI.- El domicilio de la Unidad de Transparencia;

VII.- Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar:

a). - Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y
b). - Las finalidades de estas transferencias;

VIII.- Los mecanismos y medios disponibles para que la Persona titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento de la Persona titular, y

IX.- Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a las Personas titulares los cambios al Aviso de privacidad.

Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción VIII de este artículo deberán estar disponibles para que la Persona titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las finalidades o transferencias que requieran su consentimiento, previo a que ocurra dicho tratamiento.

Artículo 22. El Aviso de privacidad en su modalidad simplificada deberá contener la información a que se refieren las fracciones I, IV, VII y VIII del artículo anterior y señalar el sitio donde se podrá consultar el Aviso de privacidad integral.

La puesta a disposición del Aviso de privacidad a que refiere este artículo no exime al responsable de su obligación de proveer los mecanismos para que la Persona titular pueda conocer el contenido integral del Aviso de privacidad.

Artículo 23. El responsable deberá implementar los mecanismos previstos en el artículo 24 de la presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en la misma y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su posesión a la Persona titular, a la Secretaría o a las demás Autoridades garantes, según corresponda, caso en el cual deberá observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En lo que no se contraponga con la normativa mexicana podrá valerse de estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para tales fines.

Artículo 24. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el principio de responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes:

I.- Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y políticas de protección de datos personales;

II.- Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y exigibles al interior de la organización del responsable;

III.- Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales;

IV.- Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para determinar las modificaciones que se requieran;

V.- Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna o externa, incluyendo auditorías, para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales;

VI.- Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de las Personas titulares;

VII.- Diseñar, desarrollar e implementar políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley, la Ley General y las demás que resulten aplicables en la materia, y

VIII.- Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley, la Ley General y las demás que resulten aplicables en la materia.

CAPÍTULO II
DE LOS DEBERES

Artículo 25. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Artículo 26. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar:

I.- El riesgo inherente a los datos personales tratados;

II.- La sensibilidad de los datos personales tratados;

III.- El desarrollo tecnológico;

IV.- Las posibles consecuencias de una vulneración para las Personas titulares;

V.- Las transferencias de datos personales que se realicen;

VI.- El número de Personas titulares;

VII.- Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y

VIII.- El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión.

Artículo 27. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades interrelacionadas:

I.- Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión;

II.- Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de los datos personales;

III.- Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;

IV.- Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa mas no limitativa, hardware, software, personal del responsable, entre otros;

V.- Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las faltantes en la organización del responsable;

VI.- Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los datos personales;

VII.- Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales, y

VIII.- Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales.

Artículo 28. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión.

Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los datos personales, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, la Ley General y las demás disposiciones jurídicas que le resulten aplicables en la materia.

Artículo 29. El responsable deberá elaborar un Documento de seguridad que contenga, al menos, lo siguiente:

I.- El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento;

II.- Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales;

III.- El análisis de riesgos;

IV.- El análisis de brecha;

V.- El plan de trabajo;

VI.- Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad; y

VII.- El programa general de capacitación.

Artículo 30. El responsable deberá actualizar el Documento de seguridad cuando ocurran los siguientes eventos:

I.- Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en un cambio en el nivel de riesgo;

II.- Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del sistema de gestión;

III.- Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la seguridad ocurrida, y

IV.- Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad.

Artículo 31. En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable deberá analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, si fuese el caso, a efecto de evitar que la vulneración se repita.

Artículo 32. Además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad aplicable, se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos, al menos las siguientes:

I.- La pérdida o destrucción no autorizada;

II.- El robo, extravío o copia no autorizada;

III.- El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o

IV.- El daño, la alteración o modificación no autorizada.

Artículo 33. El responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a la seguridad en la que se describa ésta, la fecha en la que ocurrió, el motivo de ésta y las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva.

Artículo 34. En cuanto se confirme que ocurrieron vulneraciones que afecten de forma significativa derechos patrimoniales o morales, y el responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación; deberá informar sin dilación alguna a la Secretaría o a la Autoridad garante competente, según corresponda, así como a las Personas titulares afectadas, a fin de que puedan tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus derechos.

Artículo 35. El responsable deberá informar a la Persona titular al menos lo siguiente:

I.- La naturaleza del incidente;

II.- Los datos personales comprometidos;

III.- Las recomendaciones acerca de las medidas que la Persona titular pueda adoptar para proteger sus intereses;

IV.- Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y

V.- Los medios donde puede obtener más información al respecto.

Artículo 36. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo.

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información pública.

TÍTULO TERCERO
DERECHOS DE LAS PERSONAS TITULARES Y SU EJERCICIO

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN

Artículo 37. En todo momento la Persona titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.

Artículo 38. La Persona titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento.

Artículo 39. La Persona titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados.
Artículo 40. La Persona titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.

Artículo 41. La Persona titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en el mismo, cuando:

I.- Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia le cause un daño o perjuicio, y

II.- Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales de la misma o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.

CAPÍTULO II
DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO,

RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN

Artículo 42. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO que se formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 43. Para el ejercicio de los Derechos ARCO será necesario acreditar la identidad de la Persona titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante. El ejercicio de los Derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será posible, excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal o, en su caso, por mandato judicial.

En el ejercicio de los Derechos ARCO de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que pertenezcan a grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, se estará a lo dispuesto en las reglas previstas en la legislación civil que resulte aplicable.

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el presente Capítulo, siempre que la Persona titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto.

Artículo 44. El ejercicio de los Derechos ARCO es gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad aplicable; asimismo, se deberá considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten el ejercicio de este derecho.

Cuando la Persona titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a ésta. La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples.

Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la Persona titular.

El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los Derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo a la Persona titular.

Artículo 45. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los Derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola ocasión hasta por diez días cuando así lo justifiquen las circunstancias, siempre y cuando se le notifique a la Persona titular dentro del plazo de respuesta.

En caso de resultar procedente el ejercicio de los Derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta a la Persona titular.

Artículo 46. En la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO no podrán imponerse mayores requisitos que los siguientes:

I.- El nombre de la Persona titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;

II.- Los documentos que acrediten la identidad de la Persona titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante;

III.- De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta la solicitud;

IV.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los Derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;

V.- La descripción del Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita la Persona titular, y

VI.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, la Persona titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad requerida por la Persona titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los datos personales fundando y motivando dicha actuación.

En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, y la Autoridad garante competente no cuente con elementos para subsanarla, se prevendrá a la Persona titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los responsables, para resolver la solicitud de ejercicio de los Derechos ARCO.

Con relación a una solicitud de cancelación, la Persona titular deberá señalar las causas que la motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del responsable.

En el caso de la solicitud de oposición, la Persona titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación específica que la llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento o, en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de oposición.

Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia del responsable correspondiente, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca la Secretaría o las demás Autoridades garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias.

El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO y entregar el acuse de recibo que corresponda.

La Secretaría y las demás Autoridades garantes, en su ámbito de competencia, podrán establecer formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitar a las Personas titulares el ejercicio de los Derechos ARCO.

Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible considerando el perfil de las Personas titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con el responsable.

Artículo 47. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento de la Persona titular dicha situación dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, orientarla hacia el responsable competente.

En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos personales.

En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía haciéndolo del conocimiento a la Persona titular.

Artículo 48. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los Derechos ARCO, el responsable deberá informar a la Persona titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, a efecto de que esta última decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo.

Artículo 49. Las únicas causas en las que el ejercicio de los Derechos ARCO no será procedente son:

I.- Cuando la Persona titular o su representante no estén debidamente acreditadas para ello;

II.- Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;

III.- Cuando exista un impedimento legal;

IV.- Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

V.- Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;

VI.- Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos;

VII.- Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada;

VIII.- Cuando el responsable no sea competente;

IX.- Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados de la Persona titular;

X.- Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por la Persona titular;

XI.- Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, o

XII.- Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades.

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar a la Persona titular el motivo de su determinación, en el plazo de hasta veinte días a los que se refiere el primer párrafo del artículo 45 de la presente Ley, y por el mismo medio en que se llevó a cabo la solicitud, acompañando en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.

Artículo 50. Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 85 de la presente Ley.

CAPÍTULO III
DE LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS

Artículo 51. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, la Persona titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente empleado que le permita seguir utilizándolos.

Cuando la Persona titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en su consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitirlos, así como cualquier otra información que hubiere facilitado y se conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales.

TÍTULO CUARTO
RELACIÓN DEL RESPONSABLE Y LA PERSONA ENCARGADA

CAPÍTULO ÚNICO
RESPONSABLE Y PERSONA ENCARGADA

Artículo 52. La Persona encargada deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus actuaciones a los términos fijados por el responsable.

Artículo 53. La relación entre el responsable y la Persona encargada deberá estar formalizada mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido.

En el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberán prever, al menos, las siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste la Persona encargada:

I.- Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del responsable;

II.- Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el responsable;

III.- Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables;

IV.- Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por sus instrucciones;

V.- Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;

VI.- Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento, una vez cumplida la relación jurídica con el responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos personales, y

VII.- Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la autoridad competente.

Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento de datos personales no deberán contravenir la presente Ley, y demás disposiciones aplicables, así como lo establecido en el Aviso de privacidad correspondiente.

Artículo 54. Cuando la Persona encargada incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí misma sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable y las consecuencias legales correspondientes conforme a la legislación en la materia que le resulte aplicable.

Artículo 55. La Persona encargada podrá, a su vez, subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable, siempre y cuando medie la autorización expresa de este último, en este caso, la persona subcontratada asumirá el carácter de Persona encargada en los términos de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Cuando el contrato o el instrumento jurídico mediante el cual se haya formalizado la relación entre el responsable y la Persona encargada, prevea que esta última pueda llevar a cabo a su vez las subcontrataciones de servicios, la autorización a la que refiere el párrafo anterior se entenderá como otorgada a través de lo estipulado en estos.

Artículo 56. Una vez obtenida la autorización expresa del responsable, la Persona encargada deberá formalizar la relación adquirida con la persona subcontratada a través de un contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable, y permita acreditar la existencia, alcance y contenido de la prestación del servicio, en términos de lo previsto en el presente Capítulo.

Artículo 57. El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en el Cómputo en la nube y otras materias que impliquen el tratamiento de datos personales, siempre y cuando la persona proveedora externa garantice políticas de protección de datos personales equivalentes a los principios y deberes establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

En su caso, el responsable deberá delimitar el tratamiento de los datos personales por parte de la persona proveedora externa a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos.

Artículo 58. Para el tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones e infraestructura de Cómputo en la nube y otras materias, en los que el responsable se adhiera a los mismos mediante condiciones o cláusulas generales de contratación, sólo podrá utilizar aquellos servicios en los que la persona proveedora:

I.- Cumpla, al menos, con lo siguiente:

a).- Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los principios y deberes que correspondan conforme a lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
b).- Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que se presta el servicio;
c).- Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o permitan asumir la titularidad o propiedad de la información sobre la que preste el servicio; y
d).- Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se preste el servicio;

II.- Cuente con mecanismos, al menos, para:

a).- Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio que presta;
b).- Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos personales sobre los que se presta el servicio;
c).- Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos personales sobre los que se preste el servicio;
d).- Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya concluido el servicio prestado al responsable y que este último haya podido recuperarlos, y
e).- Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con privilegios de acceso, o bien, en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad competente, informar de ese hecho al responsable.

En cualquier caso, el responsable no podrá adherirse a servicios que no garanticen la debida protección de los datos personales, conforme a la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

TÍTULO QUINTO
COMUNICACIONES DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS TRANSFERENCIAS Y REMISIONES DE DATOS PERSONALES

Artículo 59. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de la Persona titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 16, 60 y 64 de la presente Ley.

Artículo 60. Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos:

I.- Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a éstos, o

II.- Cuando la transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito y ratificado por el Estado Mexicano, o bien, se realice a petición de una autoridad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando las facultades entre el responsable transferente y receptor sean homólogas o las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o compatibles respecto de aquéllas que dieron origen al tratamiento del responsable transferente.

Artículo 61. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los datos personales deberá tratar los datos personales, comprometiéndose a garantizar la confidencialidad y únicamente utilizará para los fines que fueron transferidos atendiendo a lo convenido en el Aviso de privacidad que le será comunicado por el responsable transferente.

Artículo 62. El responsable sólo podrá transferir o hacer Remisión de datos personales fuera del territorio nacional cuando el tercero receptor o el encargado se obliguen a proteger los datos personales conforme a los principios y deberes que establece la presente Ley y las disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Artículo 63. En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al receptor de los datos personales el Aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos personales frente a la Persona titular.

Artículo 64. El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento de la Persona titular, en los siguientes supuestos:

I.- Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte;

II.- Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;

III.- Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia;

IV.- Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última;

V.- Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados;

VI.- Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y la Persona titular;

VII.- Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés de la Persona titular, por el responsable y un tercero, o

VIII.- Cuando se trate de los casos en los que el responsable no esté obligado a recabar el consentimiento de la Persona titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, de la presente Ley;

La actualización de alguna de las excepciones previstas en este artículo no exime al responsable de cumplir con las obligaciones previstas en el presente Capítulo que resulten aplicables.

Artículo 65. Las Remisiones nacionales e internacionales de datos personales que se realicen entre responsable y encargado no requerirán ser informadas a la Persona titular, ni contar con su consentimiento.

TÍTULO SEXTO
ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO I
DE LAS MEJORES PRÁCTICAS

Artículo 66. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, el responsable podrá desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:

I.- Elevar el nivel de protección de los datos personales;

II.- Armonizar el tratamiento de datos personales en un sector específico;

III.- Facilitar el ejercicio de los Derechos ARCO por parte de las Personas titulares;

IV.- Facilitar las transferencias de datos personales;

V.- Complementar las disposiciones previstas en la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales, y

VI.- Demostrar ante la Secretaría o las Autoridades garantes, el cumplimiento de la normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales.

Artículo 67. Todo esquema de mejores prácticas que busque la validación o reconocimiento deberá:

I.- Cumplir con los criterios y parámetros que para tal efecto emita la Secretaría o la Autoridad garante que corresponda según su ámbito de competencia, y

II.- Ser notificado ante las Autoridades garantes, a fin de que sean evaluados y, en su caso, validados o reconocidos e inscritos en el registro al que refiere el último párrafo de este artículo.

La Secretaría o las Autoridades garantes, según su ámbito de competencia, deberán emitir las disposiciones normativas que regulen la operación de los registros en los que se inscribirán aquellos esquemas de mejores prácticas validados o reconocidos. Las Autoridades garantes podrán inscribir los esquemas de mejores prácticas que hayan reconocido o validado en el registro administrado por la Secretaría.

Artículo 68. Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que a su juicio y de conformidad con esta Ley impliquen el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberá realizar una Evaluación de impacto en la protección de datos personales y presentarla ante la Secretaría o las Autoridades garantes, según su ámbito de competencia; la cual podrá emitir recomendaciones no vinculantes especializadas en la materia de protección de datos personales.

El contenido de la Evaluación de impacto en la protección de datos personales deberá determinarse por la Secretaría o la Autoridad garante competente.

Artículo 69. Para efectos de esta Ley se considerará que se está en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales cuando:

I.- Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar;

II.- Se traten datos personales sensibles, y

III.- Se efectúen o pretendan efectuar transferencias de datos personales.

Artículo 70. La Secretaría o la Autoridad garante, en el ámbito de su competencia, podrá emitir criterios adicionales con sustento en parámetros objetivos que determinen que se está en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, en función de:

I.- El número de Personas titulares;

II.- El público objetivo;

III.- El desarrollo de la tecnología utilizada, y

IV.- La relevancia del tratamiento de datos personales en atención al impacto social o económico del mismo, o bien, del interés público que se persigue.

Artículo 71. Los Sujetos obligados que realicen una Evaluación de impacto en la protección de datos personales deberán presentarla ante la Secretaría o las Autoridades garantes, según su ámbito de competencia, treinta días anteriores a la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, a efecto de que emitan las recomendaciones no vinculantes correspondientes.

Artículo 72. La Secretaría o las Autoridades garantes, según su ámbito de competencia deberán emitir, de ser el caso, recomendaciones no vinculantes sobre la Evaluación de impacto en la protección de datos personales presentada por el responsable.

El plazo para la emisión de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior será dentro de los treinta días siguientes contados a partir del día siguiente a la presentación de la Evaluación de impacto en la protección de datos personales.

Artículo 73. Cuando a juicio del Sujeto obligado se puedan comprometer los efectos que se pretenden lograr con la posible puesta en operación o modificación de políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, o se trate de situaciones de emergencia o urgencia, no será necesario realizar la Evaluación de impacto en la protección de datos personales.

CAPÍTULO II
DE LAS BASES DE DATOS EN POSESIÓN DE INSTANCIAS DE SEGURIDAD, PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 74. La obtención y tratamiento de datos personales, en términos de lo que dispone esta Ley, por parte de los Sujetos obligados competentes en instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública, o para la prevención o persecución de los delitos deberán ser almacenados en las Bases de datos establecidas para tal efecto.

Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales que se recaben por los particulares en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, deberán cumplir con lo establecido en el presente Capítulo.

Artículo 75. En el tratamiento de datos personales, así como en el uso de las Bases de datos para almacenamiento, que realicen los responsables competentes de las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia deberán cumplir con los propósitos establecidos en el Título Segundo de la presente Ley.

Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad competente que faculte la ley o de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

Artículo 76. Los responsables de las Bases de datos a que se refiere este Capítulo deberán establecer medidas de seguridad de alto nivel, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

TÍTULO SÉPTIMO
RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Artículo 77. Cada responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de datos personales al interior del responsable.

Artículo 78. Para los efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la normatividad aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

I.- Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley, la Ley General y en aquellas disposiciones aplicables en la materia;

II.- Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;

III.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los Derechos ARCO;

IV.- Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una mejor observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones aplicables en la materia;

V.- Supervisar en coordinación con las Áreas o unidades administrativas competentes, el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el Documento de seguridad;

VI.- Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por las Autoridades garantes, según corresponda;

VII.- Establecer programas de capacitación y actualización para las personas servidoras públicas en materia de protección de datos personales, y

VIII.- Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente, en aquellos casos en que tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de determinado tratamiento de datos personales; particularmente, en casos relacionados con la declaración de inexistencia que realicen los responsables.

CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Artículo 79. Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia, que se integrará y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo y la presente Ley, tendrá las siguientes funciones:

I.- Auxiliar y orientar a la Persona titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales;

II.- Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;

III.- Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales sólo se entreguen a la Persona titular o su representante debidamente acreditados;

IV.- Informar a la Persona titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los datos personales, con base en lo establecido en la Ley Estatal de Derechos;

V.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;

VI.- Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO, y

VII.- Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales.

Los responsables que, en el ejercicio de sus funciones sustantivas, lleven a cabo tratamientos de datos personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, especializado en la materia, quien realizará las atribuciones mencionadas en este artículo y formará parte de la Unidad de Transparencia.

Los Sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que podrán auxiliar en la recepción, trámite y entrega de las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente.

Artículo 80. El responsable procurará contar con la infraestructura y los medios tecnológicos necesarios para garantizar que las personas con algún tipo de discapacidad o grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales.

TÍTULO OCTAVO
AUTORIDADES GARANTES

CAPÍTULO I
DE LA SECRETARÍA

Artículo 81. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la normatividad aplicable, la Secretaría tendrá las siguientes:

I.- Garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios;

II.- Interpretar la presente Ley en el ámbito administrativo;

III.- Conocer y resolver los recursos de revisión del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios que interpongan las Personas titulares, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás normatividad aplicable en la materia;

IV.- Conocer y resolver, de oficio o a petición fundada por las demás Autoridades Garantes, los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás normatividad aplicable en la materia;

V.- Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de verificación del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios;

VI.- Establecer y ejecutar las medidas de apremio previstas en términos de lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;

VII.- Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a la presente Ley y, en su caso, aportar las pruebas con las que cuente;

VIII.- Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lengua indígena, sean atendidos en la misma lengua;

IX.- Garantizar en el ámbito de su competencia, condiciones de accesibilidad para que las Personas titulares que pertenecen a grupos de atención prioritaria puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales;

X.- Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la presente Ley;

XI.- Proporcionar apoyo técnico a los responsables del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;

XII.- Divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en la materia de la presente Ley;

XIII.- Vigilar y verificar, en el ámbito del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;

XIV.- Administrar el registro de esquemas de mejores prácticas a que se refiere la presente Ley y emitir sus reglas de operación;

XV.- Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la Evaluación de impacto en la protección de datos personales que le sean presentadas;

XVI.- Emitir disposiciones generales para el desarrollo del procedimiento de verificación;

XVII.- Realizar las evaluaciones correspondientes a los esquemas de mejores prácticas que le sean notificados, a fin de resolver sobre la procedencia de su reconocimiento o validación e inscripción en el registro de esquemas de mejores prácticas, así como promover la adopción de los mismos;

XVIII.- Emitir en el ámbito del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, las disposiciones administrativas de carácter general para el debido cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que establece la presente Ley, así como para el ejercicio de los derechos de las Personas titulares;

XIX.- Celebrar convenios con los responsables para desarrollar programas que tengan por objeto homologar tratamientos de datos personales en sectores específicos, así como elevar la protección de los datos personales y realizar cualquier mejora relativa a las prácticas en la materia;

XX.- Definir y desarrollar el sistema de certificación en materia de protección de datos personales, de conformidad con lo que se establezca en los parámetros a que se refiere la presente Ley;

XXI.- Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la protección de datos personales, así como de sus prerrogativas;

XXII.- Diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables respecto al cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;

XXIII.- Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos personales entre los responsables del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios;

XXIV.- Emitir lineamientos generales para el debido tratamiento de los datos personales;

XXV.- Emitir lineamientos para homologar el ejercicio de los Derechos ARCO;

XXVI.- Emitir criterios generales de interpretación para garantizar el derecho a la protección de datos personales;

XXVII.- Promover la cooperación con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XXVIII.- Promover la cooperación con otras autoridades nacionales o internacionales para combatir conductas relacionadas con el tratamiento indebido de datos personales;

XXIX.- Diseñar, vigilar y, en su caso, operar el sistema de buenas prácticas en materia de protección de datos personales, así como el sistema de certificación en la materia, a través de disposiciones de carácter general que emita para tales fines;

XXX.- Celebrar convenios con las Autoridades garantes y responsables que coadyuven al cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, y

XXXI.- Las demás que le confiera la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES GARANTES

Artículo 82. Las Autoridades garantes tendrán, para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que tengan conferidas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes atribuciones:

I.- Conocer, sustanciar y resolver, en el ámbito de sus respectivas competencias, los recursos de revisión interpuestos por las personas titulares, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II.- Presentar petición fundada a la Secretaría para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en términos de lo previsto en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

III.- Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones;

IV.- Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales;

V.- Coordinarse con las autoridades competentes con la finalidad de que las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lenguas indígenas, sean atendidos en la misma lengua;

VI.- Garantizar en el ámbito de su competencia, condiciones de accesibilidad para que las Personas titulares que pertenecen a grupos de atención prioritaria puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos personales;

VII.- Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la presente Ley;

VIII.- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes la probable responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia;

IX.- Suscribir convenios de colaboración con la Secretaría para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

X.- Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables;

XI.- Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la protección de datos personales, así como de sus prerrogativas;

XII.- Aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables respecto del cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

XIII.- Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos personales entre los responsables;

XIV.- Solicitar la cooperación de la Secretaría en los términos del artículo 81, fracción XXVII de la presente Ley, y

XV.- Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la Evaluación de impacto en la protección de datos personales que le sean presentadas.

CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Artículo 83. Los responsables deberán colaborar con la Secretaría y las Autoridades garantes, según corresponda, para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todas las personas servidoras públicas en materia de protección de datos personales, a través de la impartición de cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente.

Artículo 84. La Secretaría y las Autoridades garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán, en coordinación con los responsables:

I.- Promover en coordinación con la autoridad educativa local, que en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Estado, se aborden contenidos sobre el derecho a la protección de datos personales, así como una cultura sobre el ejercicio y respeto de éste;

II.- Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de centros de investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de datos personales que promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con la Secretaría y las Autoridades garantes en sus tareas sustantivas, y

III.- Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que estimulen el intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los responsables.

TÍTULO NOVENO
DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO I
DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 85. La Persona titular, por sí misma o a través de su representante, podrá interponer el recurso de revisión ante las Autoridades garantes, o bien ante la Unidad de Transparencia del responsable que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, dentro de un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, a través de los siguientes medios:

I.- Por escrito libre en el domicilio de las Unidades de Transparencia de los responsables, de la Secretaría o de las Autoridades garantes, según corresponda, o en las oficinas habilitadas que al efecto establezcan;

II.- Por correo certificado con acuse de recibo;

III.- Por formatos que al efecto emitan la Secretaría o las Autoridades garantes, según corresponda;

IV.- Por los medios electrónicos que para tal fin autorice la Secretaría o las demás Autoridades garantes, o

V.- Cualquier otro medio que al efecto establezcan la Secretaría o las Autoridades garantes, según corresponda.

Se presumirá que la Persona titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir notificaciones.

Artículo 86. La Persona titular podrá acreditar su identidad a través de cualquiera de los siguientes medios:

I.- Identificación oficial;

II.- Firma electrónica avanzada o instrumento electrónico que lo sustituya, o

III.- Mecanismos de autenticación autorizados por la Secretaría o las Autoridades garantes, según corresponda, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

El uso de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá de la presentación de la copia del documento de identificación.

Artículo 87. Cuando la Persona titular actúe mediante un representante, éste deberá acreditar su personalidad en los siguientes términos:

I.- Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, o instrumento público, o declaración en comparecencia personal de la Persona titular y del representante ante la Secretaría o las Autoridades garantes, y

II.- Si se trata de una persona moral, mediante instrumento público.

Artículo 88. La interposición del recurso de revisión relacionado con datos personales de personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo.

Artículo 89. En la sustanciación de los recursos de revisión, las notificaciones que emitan las Autoridades garantes, según corresponda, surtirán efectos el mismo día en que se practiquen.

Las notificaciones podrán efectuarse:

I.- Personalmente en los siguientes casos:

a).- Se trate de la primera notificación;
b).- Se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo;
c).- Se trate de la solicitud de informes o documentos;
d).- Se trate de la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate, y
e).- En los demás casos que disponga la presente Ley;

II.- Por correo certificado con acuse de recibo, medios digitales o sistemas autorizados por las Autoridades garantes, mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo; cuando se trate de requerimientos, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones que puedan ser impugnadas;

III.- Por correo postal ordinario o por correo electrónico ordinario cuando se trate de actos distintos de los señalados en las fracciones anteriores, o

IV.- Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en su domicilio, se ignore este o el de su representante.

Artículo 90. El cómputo de los plazos señalados en el presente Título comenzará a correr a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente.

Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía por parte de las Autoridades garantes.

Artículo 91. La Persona titular, el responsable o cualquier autoridad deberán atender los requerimientos de información en los plazos y términos que las Autoridades garantes establezcan.

Artículo 92. Cuando la Persona titular, el responsable o cualquier autoridad se niegue a atender o cumplimentar los requerimientos, solicitudes de información y documentación, emplazamientos, citaciones o diligencias notificadas por las Autoridades garantes, o facilitar la práctica de las diligencias que hayan

sido ordenadas, o entorpezcan sus actuaciones, tendrán por perdido su derecho para hacerlo valer en algún otro momento del procedimiento y las Autoridades garantes, tendrán por ciertos los hechos materia del procedimiento y resolverán con los elementos que dispongan.

Artículo 93. En la sustanciación de los recursos de revisión, las partes podrán ofrecer las siguientes pruebas:

I.- La documental pública;

II.- La documental privada;

III.- La inspección;

IV.- La pericial;

V.- La testimonial;

VI.- La confesional, excepto tratándose de autoridades;

VII.- Las imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la ciencia y tecnología, y

VIII.- La presunción legal y humana.

Las Autoridades garantes, podrán allegarse de los medios de prueba que consideren necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación aplicable.

Artículo 94. Transcurrido el plazo previsto en el artículo 45 de la presente Ley, para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO sin que se haya emitido ésta, la Persona titular o, en su caso, su representante podrá interponer el recurso de revisión dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya vencido el plazo para dar respuesta.

Artículo 95. El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos:

I.- Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables;

II.- Se declare la inexistencia de los datos personales;

III.- Se declare la incompetencia por el responsable;

IV.- Se entreguen datos personales incompletos;

V.- Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado;

VI.- Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;

VII.- No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia;

VIII.- Se entreguen o pongan a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible;

IX.- La Persona titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los datos personales;

X.- Se obstaculice el ejercicio de los Derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la procedencia de estos;

XI.- No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO, y

XII.- En los demás casos que disponga la legislación aplicable.

Artículo 96. Los únicos requisitos exigibles en el escrito de interposición del recurso de revisión serán los siguientes:

I.- El área responsable ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO;

II.- El nombre de la Persona titular que recurre o su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones;

III.- La fecha en que fue notificada la respuesta a la Persona titular, o bien, en caso de falta de respuesta, la fecha de presentación de la solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO;

IV.- El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de inconformidad;

V.- En su caso, copia de la respuesta que se impugna y de la notificación correspondiente, y

VI.- Los documentos que acrediten la identidad de la Persona titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante.

Al recurso de revisión se podrá acompañar las pruebas y demás elementos que considere la persona titular procedentes someter a juicio de las Autoridades garantes.

En ningún caso será necesario que la Persona titular ratifique el recurso de revisión interpuesto.

Artículo 97. Una vez admitido el recurso de revisión, las Autoridades Garantes podrán buscar una conciliación entre la Persona titular y el responsable.

De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de revisión quedará sin materia y las Autoridades garantes deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo.

Artículo 98. Admitido el recurso de revisión, la Autoridad garante competente promoverá la conciliación entre las partes, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I.- Requerirá a las partes que manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete días, contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que contendrá un resumen del recurso de revisión y de la respuesta del responsable si la hubiere, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia.

La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos, electrónicos o por cualquier otro medio que se determine, según corresponda. En cualquier caso, la conciliación habrá de hacerse constar por el medio que permita acreditar su existencia.

Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando la Persona titular sean niñas, niños o adolescentes, y se haya vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones jurídicas aplicables, salvo que comparezca por conducto de su legítimo representante, de conformidad con las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable;

II.- Recibida la manifestación de conciliar por ambas partes, la Autoridad garante que corresponda, señalará el lugar o medio, día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación en la que se procurará

avenir los intereses entre la Persona titular y el responsable, la cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes en que se haya recibido la manifestación antes mencionada.

Las Autoridades garantes en su calidad de conciliadoras podrán, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las partes que presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación.

Las conciliadoras podrán suspender, cuando lo estimen pertinente o a instancia de ambas partes, la audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, la conciliadora competente señalará día y hora para su reanudación dentro de los cinco días siguientes.

De toda audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste el resultado de esta. En caso de que el responsable o la Persona titular o sus respectivos representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha negativa;

III.- Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia en un plazo de tres días, será convocada a una segunda audiencia de conciliación, en el plazo de cinco días; en caso de que no acuda a esta última, se continuará con el recurso de revisión. Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación alguna, se continuará con el procedimiento;

IV.- De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso de revisión;

V.- De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de revisión quedará sin materia y las Autoridades garantes deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo, y

VI.- El cumplimiento del acuerdo dará por concluida la sustanciación del recurso de revisión, en caso contrario, las Autoridades garantes reanudarán el procedimiento.

Artículo 99. Las Autoridades garantes resolverán el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, el cual podrá ampliarse hasta por veinte días por una sola ocasión.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior será suspendido durante el periodo de cumplimiento del acuerdo de conciliación.

Artículo 100. Durante el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo, las Autoridades garantes deberán aplicar la suplencia de la queja a favor de la Persona titular, siempre y cuando no altere el contenido original del recurso de revisión, ni modifique los hechos o peticiones expuestas en el mismo, así como garantizar que las partes puedan presentar los argumentos y constancias que funden y motiven sus pretensiones.

Artículo 101. Si en el escrito de interposición del recurso de revisión la Persona titular no cumple con alguno de los requisitos previstos en el artículo 96 de la presente Ley y las Autoridades garantes no cuentan con elementos para subsanarlos, éstas deberán requerir a la Persona titular, por una sola ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la presentación del escrito.

La Persona titular contará con un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, con el apercibimiento de que, en caso de no cumplir con el requerimiento, se desechará el recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen las Autoridades garantes para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.

Artículo 102. Las resoluciones de las Autoridades garantes podrán:

I.- Sobreseer o desechar el recurso de revisión por improcedente;

II.- Confirmar la respuesta del responsable;

III.- Revocar o modificar la respuesta del responsable, u

IV.- Ordenar la entrega de los datos personales, en caso de omisión del responsable.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución. Los responsables deberán informar a la Autoridad garante competente el cumplimiento de sus resoluciones.

Ante la falta de resolución por parte de las Autoridades garantes, se entenderá confirmada la respuesta del responsable.

Cuando las Autoridades garantes determinen, durante la sustanciación del recurso de revisión, que se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.

Artículo 103. El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando:

I.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 85 de la presente Ley;

II.- La Persona titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este último;

III.- Las Autoridades garantes hayan resuelto anteriormente en definitiva sobre la materia de este;

IV.- No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en el artículo 95 de la presente Ley;

V.- Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa interpuesto por la persona recurrente, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido ante las Autoridades garantes, según corresponda;

VI.- La persona recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos, o

VII.- La persona recurrente no acredite interés jurídico.

El desechamiento no implica la preclusión del derecho de la Persona titular para interponer ante las Autoridades garantes, según corresponda, un nuevo recurso de revisión.

Artículo 104. El recurso de revisión sólo podrá ser sobreseído cuando:

I.- La persona recurrente se desista expresamente;

II.- La persona recurrente fallezca;

III.- Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los términos de la presente Ley;

IV.- El responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o

V.- Quede sin materia el recurso de revisión.

Artículo 105. Las Autoridades garantes deberán notificar las resoluciones a las partes a más tardar, al tercer día siguiente de su emisión, plazo en el que deberán de publicarlas en versión pública.

Artículo 106. Las resoluciones de la Secretaría y las Autoridades garantes serán vinculantes, definitivas e inatacables para los responsables.

Las Personas titulares podrán impugnar dichas resoluciones ante los jueces y tribunales especializados en materia de datos personales establecidos por el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo.

CAPÍTULO II
DE LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Artículo 107. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas con motivo de los recursos que se sometan a su competencia, la Secretaría podrá emitir los criterios de interpretación que estime pertinentes, los cuales se establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, y cuya aplicación será obligatoria para los responsables del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios y de carácter orientador para las demás Autoridades garantes.

Artículo 108. Todo criterio que emita la Secretaría deberá contener una clave de control para su debida identificación y se compondrá de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.

TÍTULO DÉCIMO
FACULTAD DE VERIFICACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Artículo 109. Las Autoridades garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás normatividad que se derive de ésta.

En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el personal de las Autoridades garantes estará obligado a guardar confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso en virtud de la verificación correspondiente.

El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de una verificación, o a sus Bases de datos personales, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información.

Artículo 110. La verificación podrá iniciarse:

I.- De oficio, cuando las Autoridades garantes cuenten con indicios que hagan presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes, o

II.- Por denuncia de la Persona titular, cuando considere que ha sido afectada por actos del responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables o, en su caso, por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia.

El derecho a presentar una denuncia prescribe en el término de un año contado a partir del día siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de esta. Cuando los hechos u omisiones sean de tracto sucesivo, el término empezará a contar a partir del día hábil siguiente al último hecho realizado.

La verificación no procederá y no se admitirá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión previstos en la presente Ley.

Previo a la verificación respectiva, las Autoridades garantes podrán desarrollar investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio respectivo.

Artículo 111. Para la presentación de una denuncia no podrán solicitarse mayores requisitos que los que a continuación se describen:

I.- El nombre de la persona que denuncia o, en su caso, de su representante;

II.- El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia;

III.- La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para probar su dicho;

IV.- El responsable denunciado y su domicilio o, en su caso, los datos para su identificación o ubicación, y

V.- La firma de la persona denunciante o, en su caso, de su representante. En caso de no saber firmar, bastará la huella digital.

La denuncia podrá presentarse por escrito libre, o a través de los formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezcan las Autoridades garantes.

Una vez recibida la denuncia, la Secretaría o las Autoridades garantes deberán acusar recibo de esta. El acuerdo correspondiente se notificará a la persona denunciante.

Artículo 112. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la procedencia de la actuación por parte de las Autoridades garantes, la cual tiene por objeto requerir al responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del responsable o, en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las Bases de datos personales respectivas.

Para la verificación en instancias de seguridad pública en el ámbito estatal, se requerirá en la resolución, una fundamentación y motivación reforzada de la causa del procedimiento, debiéndose asegurar la información sólo para uso exclusivo de la autoridad y para los efectos establecidos en el artículo 113, de la presente ley.

El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días.

Las Autoridades garantes podrán ordenar medidas cautelares, si del desahogo de la verificación advierten un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de Bases de datos de los responsables.

Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta en tanto los responsables lleven a cabo las recomendaciones hechas por las Autoridades garantes.

Artículo 113. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emitan las Autoridades garantes, en las cual se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que las mismas determinen.

Artículo 114. Los responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de auditorías por parte de las Autoridades garantes, según corresponda, que tengan por objeto verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para el cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles implementados por el responsable, identificar sus deficiencias, así como proponer acciones correctivas complementarias, o bien, recomendaciones que en su caso correspondan.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
MEDIDAS DE APREMIO Y RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO

Artículo 115. Para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las Autoridades garantes, según corresponda, se deberá observar lo dispuesto en el Capítulo III del Título Séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.

Artículo 116. Las Autoridades garantes podrán imponer las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:

I.- La amonestación pública, o

II.- La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El incumplimiento de los responsables será difundido en los portales de obligaciones de transparencia de las Autoridades garantes, y considerados en las evaluaciones que realicen éstas.

En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades garantes implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 126 de la presente Ley, deberán denunciar los hechos ante la autoridad competente.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 117. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumpliere con la resolución, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta lo obligue a cumplir sin demora.

Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se dará vista a la autoridad competente en materia de responsabilidades.

Artículo 118. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo deberán ser aplicadas por las Autoridades garantes, por sí mismas o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.

Artículo 119. Las multas que fijen las Autoridades garantes se harán efectivas a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.

Artículo 120. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente Capítulo, las Autoridades garantes deberán considerar:

I.- La gravedad de la falta del responsable, determinada por elementos tales como el daño causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades garantes y la afectación al ejercicio de sus atribuciones;

II.- La condición económica de la persona infractora, y

III.- La reincidencia.

Las Autoridades garantes establecerán, mediante lineamientos de carácter general, las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta de observancia a sus determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas de apremio que apliquen e implementen, conforme a los elementos desarrollados en este Capítulo.

Artículo 121. En caso de reincidencia, las Autoridades garantes podrán imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza.

Artículo 122. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio a la persona infractora.

Artículo 123. La amonestación pública será impuesta por las Autoridades garantes y será ejecutada por el superior jerárquico inmediato de la persona infractora.

Artículo 124. Las Autoridades garantes podrán requerir a la persona infractora la información necesaria para determinar su condición económica, apercibida de que en caso de no proporcionar la misma, las multas se cuantificarán con base en los elementos que se tengan a disposición, entendidos como los que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios de información o sus propias páginas de Internet y, en general, cualquiera que evidencie su condición, quedando facultadas las Autoridades garantes para requerir aquella documentación que se considere indispensable para ese efecto a las autoridades competentes.

Artículo 125. En contra de la imposición de medidas de apremio procede el juicio correspondiente, de conformidad con la normativa en materia de procedimiento administrativo y amparo.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

Artículo 126. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de la presente Ley, las siguientes:

I.- Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO;

II.- Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho de que se trate;

III.- Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

IV.- Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los principios y deberes establecidos en la presente Ley;

V.- No contar con el Aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos a que refiere el artículo 21 de la presente Ley, según sea el caso, y demás disposiciones aplicables en la materia;

VI.- Clasificar como confidencial con dolo o negligencia, datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables. La sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa, que haya quedado firme, respecto del criterio de clasificación de los datos personales;

VII.- Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 36 de la presente Ley;

VIII.- No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los artículos 25, 26 y 27 de la presente Ley;

IX.- Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas de seguridad, según los artículos 25, 26 y 27 de la presente Ley;

X.- Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la presente Ley;

XI.- Obstruir los actos de verificación que realicen las Autoridades garantes;

XII.- Crear Bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 5 de la presente Ley;

XIII.- No acatar las resoluciones emitidas por la Secretaría o las Autoridades garantes, y

XIV.- Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere el artículo 34, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, o bien, entregar el mismo de manera extemporánea.

Para efecto de establecer cuáles de las causas de responsabilidad del presente artículo son consideradas como graves o no graves, se estará a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Hidalgo.

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Artículo 127. Para las conductas a que se refiere el artículo anterior se dará vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

Artículo 128. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 de esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se ejecutarán de manera independiente.

Para tales efectos, la Secretaría o las Autoridades garantes podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.

Artículo 129. En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, las Autoridades garantes competentes deberán dar vista al órgano interno de control del responsable correspondiente, con el fin de que instrumenten los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Artículo 130. En aquellos casos en que la persona presunta infractora tenga la calidad de persona servidora pública, la Secretaría o la Autoridad Garante, deberá remitir a la autoridad competente junto con

la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.

La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su caso, de la ejecución de la sanción a la Secretaría o a la Autoridad garante que corresponda.

A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, la Secretaría o la Autoridad garante que corresponda deberá elaborar lo siguiente:

I.- Denuncia dirigida a la contraloría, órgano interno de control o equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir una posible responsabilidad, y

II.- Expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba que considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad, y que acrediten el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas presentadas.

La denuncia y el expediente deberán remitirse a la contraloría, órgano interno de control o equivalente dentro de los quince días siguientes a partir de que las Autoridades garantes tengan conocimiento de los hechos.

Artículo 131. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de las Autoridades garantes implique la presunta comisión de un delito, éstas deberán denunciar los hechos ante la autoridad competente.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abrogan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el día 4 de mayo de 2016 y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 24 de julio de 2017, así como las disposiciones reglamentarias que de ellas derivan.

Asimismo, se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan o contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto, se entenderá extinto el ente público denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, salvo lo dispuesto en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero transitorios.

CUARTO. A partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, todas las atribuciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el estado de Hidalgo se entenderán conferidas a Transparencia para el Pueblo de Hidalgo, así como a las demás Autoridades Garantes, en términos de lo dispuesto en el presente Decreto y en el ámbito de sus respectivas competencias.

Tratándose de las atribuciones en materia de protección de datos personales en posesión de los Sujetos obligados en el Estado de Hidalgo, se entenderán transferidas a la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, así como a las demás Autoridades Garantes, en términos de lo dispuesto en el presente Decreto y en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las menciones, referencias o atribuciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general, en cualquier disposición normativa, respecto al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, se entenderán hechas o conferidas a las Autoridades Garantes, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto.

QUINTO. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, tramitados ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos Obligados, se sustanciarán ante Transparencia para el Pueblo de Hidalgo y la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, según corresponda, conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento de su inicio.

La defensa legal ante autoridades administrativas, jurisdiccionales y judiciales de los actos administrativos y jurídicos emitidos por el Instituto, en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, se llevará a cabo por Transparencia para el Pueblo de Hidalgo.

Transparencia para el Pueblo de Hidalgo remitirá a la Autoridad Garante competente aquellos asuntos que se mencionan en los párrafos anteriores que le correspondan conforme al ámbito de sus atribuciones, para su atención.

SEXTO. La Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, la Contraloría General del Poder Judicial; la Contraloría Interna del Poder Legislativo y los órganos internos de control u homólogos de los organismos constitucionales y legalmente autónomos en el Estado de Hidalgo, en un plazo máximo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto deberán realizar las adecuaciones necesarias a su normativa interna para dar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo.

SÉPTIMO. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, se suspenden por un plazo de noventa días naturales, todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación, establecidos en el propio Decreto y demás normativa aplicable, con excepción de la recepción y atención de las solicitudes de información y derechos ARCO que se tramitan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

OCTAVO. Los recursos humanos con que cuente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, pasarán a formar parte de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto; para lo cual el Instituto transferirá a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, los recursos correspondientes al valor total restante del presupuesto del rubro de servicios personales, a fin de que esa dependencia, en coordinación con la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, realicen las acciones que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

NOVENO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo transferirá a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, los recursos correspondientes a las economías y ahorros que se generen derivados del proceso de desincorporación en la modalidad de extinción de dicho ente público, en términos de la normatividad aplicable.

DÉCIMO. Los recursos materiales con que cuente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, serán asignados a la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; para lo cual el Instituto concretará dicha transferencia mediante donación a la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a fin de que esa dependencia realice el análisis de factibilidad correspondiente para la recepción de los bienes donados, con base en la información que posea el Instituto al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

La Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo a través de su área administrativa dará seguimiento a la transferencia de los bienes donados.

DÉCIMO PRIMERO. Los registros, padrones y sistemas, internos y externos, con los que cuente el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, así como los sistemas informáticos utilizados por el mismo, incluso los que ya no se utilicen pero contengan registros históricos, incluida su documentación y titularidad, serán transferidos a la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a fin de que esa dependencia realice las acciones que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMO SEGUNDO. Los expedientes y archivos que a la entrada en vigor del presente Decreto estén a cargo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo para el ejercicio de sus funciones sustantivas, competencias o facultades, serán transferidos a la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, de conformidad con la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMO TERCERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo subsistirá con personalidad jurídica únicamente para efectos del proceso de desincorporación en la modalidad de extinción y su respectiva transferencia.

DÉCIMO CUARTO. Para efectos de las obligaciones establecidas para el Instituto en los transitorios Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero del presente Decreto, el Comité Interinstitucional de Transición a que hace referencia el transitorio Octavo del Decreto Número 580 – LXVI "Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, relativo a la simplificación orgánica en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales" a propuesta de su Presidente, nombrará de entre el personal del Instituto a una persona, con nivel Directivo, como liquidador en el proceso de desincorporación en la modalidad de extinción del Instituto y su respectiva transferencia.

La persona que sea nombrada como liquidador, contará con la representación legal del Instituto para ejercer los actos relacionados con su desincorporación en la modalidad de extinción y transferencia, así como realizar las gestiones correspondientes para cumplir con las obligaciones administrativas y financieras del propio Instituto, y que se hayan generado hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, incluyendo aquellas con motivo de las relaciones laborales.

DÉCIMO QUINTO. El Órgano Interno de Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo queda extinto y sus asuntos y procedimientos que a la entrada en vigor del presente Decreto estén a su cargo, así como los expedientes y archivos, serán transferidos al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo dentro de los veinte días hábiles siguientes a su entrada en vigor, y serán tramitados y resueltos por dicho órgano conforme a las disposiciones jurídicas vigentes al momento de su inicio.

DÉCIMO SEXTO. En un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con la intervención de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, deberá emitir las disposiciones y adecuaciones reglamentarias relativas a la legislación contenida en dicho Decreto.

DÉCIMO SÉPTIMO. La persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, en un término no mayor de quince días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, nombrará al Titular del Órgano desconcentrado denominado Transparencia para el Pueblo de Hidalgo.

DÉCIMO OCTAVO. Las personas servidoras públicas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, deberán presentar la declaración patrimonial y de intereses de conclusión, así como la declaración inicial en caso de formar parte de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y deberán realizarlo en los sistemas de la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo habilitados para tales efectos o en los medios que esta determine.

De la misma manera, también es aplicable a las personas que se hayan desempeñado como personas servidoras públicas en el referido Instituto y que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto aún tengan pendiente cumplir con dicha obligación.

DÉCIMO NOVENO. Todas las personas servidoras públicas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, dentro de los treinta días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, deben realizar el proceso de entrega-recepción, según corresponda, a la persona servidora pública designada por la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, conforme a la normativa aplicable, considerando que la entrega que se realice no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente con posterioridad.

VIGÉSIMO. El Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Hidalgo deberá instalarse a más tardar dentro de los treinta días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, previa convocatoria que al efecto emita la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- EXPEDIDO POR LA LXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

DIP. JUAN PABLO ESCALANTE URBÁN
PRESIDENTE

DIP. MÓNICA LEANETT REYES MARTÍNEZ
SECRETARIA

DIP. ORQUÍDEA LARRAGOITI OSORIO
SECRETARIA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DECRETO 728-LXVI.- POR EL QUE SE EXPIDEN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO; LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO, Y EN OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, TENGO A BIEN PROMULGAR EL PRESENTE DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA SECRETARIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE HIDALGO.

LIC. JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR.
RÚBRICA.